



Asamblea General

Distr. general
18 de marzo de 2022
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 92º período de sesiones, 15 a 19 de noviembre de 2021

Opinión núm. 81/2021, relativa a Paul Rusesabagina (Rwanda)

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. En su resolución 1997/50, la Comisión prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. La última vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años fue en su resolución 42/22.

2. De conformidad con sus métodos de trabajo¹, el Grupo de Trabajo transmitió el 3 de junio de 2021 al Gobierno de Rwanda una comunicación relativa a Paul Rusesabagina. El Gobierno no ha respondido a la comunicación. El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole,

¹ [A/HRC/36/38](#).



género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).

Información recibida

Comunicación de la fuente

4. Paul Rusesabagina nació en 1954, tiene nacionalidad rwandesa y belga y es residente permanente en los Estados Unidos de América.

5. Según la información recibida, el Sr. Rusesabagina ha prestado apoyo a supervivientes y víctimas del genocidio y la opresión. En 1994, mientras trabajaba como director del hotel Mille Collines en Kigali, arriesgó su vida para acoger a hutus y tutsis que buscaban refugio a causa del genocidio. La fuente hace referencia a una película, *Hotel Rwanda*, que contiene una representación de esos hechos. El Sr. Rusesabagina ha dedicado su vida a impartir charlas sobre las enseñanzas extraídas del genocidio, dirigidas a periodistas, educadores, estudiantes, encargados de la formulación de políticas, líderes empresariales y defensores de los derechos humanos.

6. El Sr. Rusesabagina creó la Fundación Hotel Rwanda Rusesabagina a fin de recabar apoyo en favor de una comisión de la verdad y la reconciliación administrada internacionalmente para Rwanda y la región de los Grandes Lagos. La Fundación se ha dedicado a temas relacionados con los conflictos actuales. Ha hecho campaña por el fin de la intervención militar y contra la explotación de minerales conflictivos. El Sr. Rusesabagina ha criticado al Gobierno de Rwanda y ha abordado abiertamente la responsabilidad de este por la comisión de presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y, posiblemente, genocidio.

7. La fuente señala que el Sr. Rusesabagina se convirtió en blanco de las críticas públicas del Gobierno de Rwanda por sus opiniones y creencias. Tras un intento fallido de asesinato en 1996, abandonó Rwanda para solicitar asilo político en Bélgica, donde siguió expresando sus críticas contra el Gobierno. En 2009, temiendo por su seguridad, se vio obligado a trasladarse a los Estados Unidos.

8. En 2010, el Gobierno de Rwanda al parecer empezó a acusar al Sr. Rusesabagina de financiar un grupo rebelde de la República Democrática del Congo que es considerado una organización terrorista. Según se informa, el Sr. Rusesabagina ha seguido sufriendo amenazas y atentados contra su vida, así como el saqueo de su vivienda en Bélgica.

9. El Sr. Rusesabagina se ha convertido en un opositor político en la diáspora, ejerciendo durante un tiempo como el primer jefe de una coalición de partidos políticos cuando esta fue fundada en 2018 y criticando frecuentemente al Gobierno por su represión de la disidencia y la libertad políticas.

a) Detención y privación de libertad

10. Según la información recibida, en 2020 el Sr. Rusesabagina fue invitado a viajar a Burundi para impartir charlas en iglesias y en reuniones públicas. El 26 de agosto de 2020, salió de Chicago y voló a Dubái (Emiratos Árabes Unidos). Allí tenía previsto reunirse con su anfitrión y volar a Burundi. Llegó a Dubái aproximadamente a las 19.00 horas (hora local) del 27 de agosto de 2020. La fuente afirma que el Gobierno de Rwanda dispuso que un jet privado llevara al Sr. Rusesabagina a Kigali sin su conocimiento y contra su voluntad, a donde llegó en la madrugada del 28 de agosto de 2020. El Ministro de Justicia de Rwanda admitió posteriormente que el Gobierno había pagado el vuelo. No se tiene constancia de que se haya solicitado una orden de detención, extradición o expulsión contra el Sr. Rusesabagina.

11. La fuente alega que el Sr. Rusesabagina fue sedado en el avión mientras estaba en Dubái. Cuando se dio cuenta de que el avión estaba aterrizando en Kigali, empezó a gritar y trató de salir del avión, pensando que le iban a matar o a hacer daño. A continuación, fue inmovilizado por cuatro agentes de la Oficina de Investigación de Rwanda, que entraron en el avión y lo ataron. Lo arrastraron por la pista del aeropuerto y lo metieron en un coche.

Nunca se le ha presentado una orden de detención ni documentación a ese respecto, como exige la legislación rwandesa.

12. Del 28 al 31 de agosto de 2020, el Sr. Rusesabagina estuvo presuntamente retenido en unas instalaciones descritas como un “matadero”, en las que se podía “oír a personas, mujeres gritando, chillando y pidiendo ayuda”. Durante la mañana del 28 de agosto, el Sr. Rusesabagina fue presuntamente torturado por un agente de la Oficina de Investigación de Rwanda, que llevaba botas militares y le pisó el cuello mientras le decía “sabemos cómo torturar”. Durante su reclusión en el “matadero”, el Sr. Rusesabagina fue inmovilizado, le vendaron los ojos y lo mantuvieron en régimen de aislamiento. No se le proporcionaron alimentos y, en ocasiones, se le impidió dormir. A sus 66 años, superviviente de cáncer y con problemas de salud crónicos, lo mantenían atado, sin que pudiera levantarse ni caminar, le faltaban las fuerzas y se ahogaba.

13. Según la información recibida, mientras estuvo detenido en el “matadero”, al Sr. Rusesabagina le quitaron la venda de los ojos en una ocasión, para un interrogatorio del Fiscal General de Rwanda y el Secretario General de la Oficina de Investigación de Rwanda. Presuntamente, le dijeron que necesitaban una confesión que incriminara falsamente a un dirigente extranjero en los delitos de los que iba a ser acusado, entre ellos el de recibir dinero para una organización terrorista. Al parecer, le ofrecieron ponerle en libertad si aceptaba la acusación, a lo que el Sr. Rusesabagina se negó. Posteriormente fue trasladado a la comisaría de Remera, donde estuvo recluido hasta el 17 de septiembre, y después fue trasladado a la prisión central de Nyarugenge, en Mageragere. Durante los 22 días que permaneció privado de libertad en las comisarías, perdió aproximadamente 9 k, debido a la privación de sueño y alimentos.

14. El 31 de agosto de 2020, el Sr. Rusesabagina fue trasladado a la comisaría de policía metropolitana de Remera, en Kigali, donde fue inscrito como preso y fue recluido. En ese momento, las autoridades rwandesas al parecer informaron a las autoridades belgas de la detención de un ciudadano de ese país.

15. La fuente afirma que el Sr. Rusesabagina estuvo detenido en régimen de incomunicación entre el 27 y el 31 de agosto de 2020 y que fue torturado durante ese período. No se sabe dónde estuvo retenido durante ese tiempo, ni en qué condiciones. A pesar de las indagaciones, ni su familia ni sus abogados han podido aclarar lo sucedido durante ese período, ya que no han podido plantear la cuestión en entrevistas públicas ni en procedimientos ante los tribunales.

16. Desde la noche del 27 de agosto hasta el 8 de septiembre, el Sr. Rusesabagina no tuvo al parecer ningún contacto directo con su familia. Concedió una entrevista al *New York Times* el 17 de septiembre de 2020, en la que “parecía estar hablando bajo coacción”². En la entrevista, en la que su relato resultó en ocasiones confuso, fue incapaz de contar qué le había ocurrido durante los tres días que transcurrieron entre su vuelo desde Dubái y su reaparición en Kigali, pero dijo: “No sé dónde me encontraba. Tenía las piernas y las manos atadas y una venda en la cara. No podía ver nada”.

17. Según las informaciones recibidas, el 31 de agosto de 2020 la Oficina de Investigación de Rwanda anunció una primera versión de la detención en un tuit, afirmando que las autoridades habían detenido al Sr. Rusesabagina “gracias a la cooperación internacional” y había sido puesto bajo custodia. No se facilitaron detalles de la “cooperación internacional”. Ese tuit fue retuiteado el mismo día por el Ministro de Justicia y Fiscal General, que alabó que las detenciones se produjeran “gracias a la cooperación internacional”. La Oficina también anunció que el Sr. Rusesabagina era “sospechoso de ser el fundador, líder, patrocinador y miembro de grupos terroristas violentos, armados y extremistas [...] que operan desde varios lugares de la región y el extranjero” y que pesaba sobre él una orden de detención internacional. Sin embargo, la fuente ha refutado esta alegación.

18. El 6 de septiembre de 2020, el Presidente de Rwanda apareció en la televisión nacional e indicó que el Sr. Rusesabagina había sido “embaucado”, dando a entender que había sido engañado para que embarcara en el avión. Al parecer, dijo que: “No se produjo ningún

² Véase <https://www.nytimes.com/2020/09/17/world/africa/paul-rusesabagina-rwanda-interview.html>.

secuestro. No se cometió infracción alguna en el proceso de su traslado hasta aquí. Llegó aquí sobre la base de lo que creía y quería hacer [...] La verdad es que fue impecable”. El jefe del Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad, comentó, al parecer, que “fue absolutamente impecable y debo decir que una de las mejores operaciones que cualquier país pueda llevar jamás a cabo”.

19. La fuente afirma que posteriormente, en febrero de 2021, al hablar con un periodista, el Presidente volvió a confirmar la operación. En una entrevista realizada el 26 de febrero de 2021, el Ministro de Justicia afirmó que el Gobierno de Rwanda había pagado el vuelo a Kigali. El Gobierno admitió haber engañado al Sr. Rusesabagina para que abandonara su casa y fuera contra su voluntad a Rwanda, país que abandonó tras un intento fallido de asesinato en 1996 y al que no quería regresar voluntariamente al temer por su vida.

20. La fuente argumenta que el Gobierno ha proporcionado versiones contradictorias sobre la detención. Sin embargo, a raíz de las críticas recibidas, el Gobierno emitió una tercera versión, en la que afirmó que el Sr. Rusesabagina había embarcado voluntariamente en un avión privado, que luego hizo una escala en Kigali y los rwandeses aprovecharon la situación para detenerlo. Esta explicación contradice presuntamente la versión emitida por la Oficina de Investigación de Rwanda y el Ministro de Justicia y Fiscal General, y la versión presentada por el Presidente y el jefe del Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad.

21. El 1 de septiembre de 2020, un portavoz de la Oficina de Investigación de Rwanda indicó que el Sr. Rusesabagina “tiene derecho a un abogado y a hablar con su familia”. Un periódico publicó una entrevista con el Sr. Rusesabagina, que supuestamente concedió desde su celda en la comisaría de policía metropolitana de Remera. El periodista tuvo acceso al Sr. Rusesabagina antes de que éste se pusiera en contacto con su abogado, los funcionarios consulares o su familia. Durante la entrevista, el Sr. Rusesabagina presuntamente afirmó que estaba siendo “tratado con amabilidad” y que se le había “ofrecido la opción de elegir [su] equipo de defensa”, que esperaba que se le hiciera justicia y tener un juicio imparcial en Rwanda y que “estaba eligiendo su equipo de defensa para demostrar su inocencia”. No obstante, confirmó que no podía hablar libremente durante su privación de libertad. Se desconoce si participó voluntariamente en la entrevista, si esta fue supervisada o las condiciones en las que accedió a hablar.

b) Diligencias judiciales

22. Según la fuente, la familia del Sr. Rusesabagina contrató los servicios de un abogado. Este llevó una carta a la Oficina de Investigación de Rwanda en la que se confirmaba que la familia le había pedido que representara al Sr. Rusesabagina.

23. El 2 de septiembre de 2020, tras tener conocimiento de que estaba recluido en la comisaría metropolitana de Remera, la familia del Sr. Rusesabagina llamó a la comisaría y pidió hablar con él. Se les informó de que se transmitiría su solicitud, pero nunca recibieron respuesta. Ese mismo día, el abogado que habían contratado acudió a la comisaría en dos ocasiones, pero se le negó el acceso. Este informó después al Colegio de Abogados de que no se le había permitido ver a su cliente.

24. El 5 de septiembre de 2020, otro abogado rwandés dio una conferencia de prensa en la que afirmó haber sido seleccionado por el Sr. Rusesabagina de una lista de abogados públicos. Al día siguiente, la familia del Sr. Rusesabagina declaró que el abogado no había sido designado por ellos, sino que había sido nombrado por el Gobierno; el Sr. Rusesabagina nunca hubiera contratado a un abogado que diera una conferencia de prensa pública sin hablar o consultar antes con la familia y que se negara a abordar la cuestión de su secuestro y detención.

25. La fuente afirma que el abogado de oficio representó al Sr. Rusesabagina de forma contraria a sus intereses, ya que, entre otras cosas, no impugnó la competencia de los tribunales rwandeses; no expuso argumentos para que se le concediera la libertad provisional, habida cuenta de la edad del Sr. Rusesabagina, su estado de salud y la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19); dio una conferencia de prensa para socavar la reclamación de la familia; y no se puso en contacto con el abogado designado por la familia.

26. Según se informa, el 9 de septiembre de 2020 el Presidente declaró que: “Rusesabagina encabeza un grupo de terroristas que ha matado a rwandeses. Tendrá que pagar por estos delitos. Rusesabagina tiene las manos manchadas de la sangre de los rwandeses”.

27. La fuente afirma que, 13 días después de la detención del Sr. Rusesabagina, la Oficina de Investigación de Rwanda trasladó el sumario de la causa a la Fiscalía Nacional. El 14 de septiembre de 2020, 18 días después de su detención, el Sr. Rusesabagina compareció ante el tribunal de primera instancia de Kicukiro, en Kigali, para una audiencia previa al juicio, su primera comparecencia ante un juez. Los abogados de oficio del Sr. Rusesabagina solicitaron su libertad provisional debido a sus problemas de salud. El 17 de septiembre de 2020, el tribunal le denegó la libertad bajo fianza, al considerar que los cargos que se le imputaban eran “graves y serios” y que “los problemas de salud aducidos por el Sr. Rusesabagina son infundados”.

28. Al parecer, el 25 de septiembre de 2020 el Sr. Rusesabagina compareció ante el tribunal intermedio de Nyarugenge acompañado de sus abogados de oficio, para interponer un recurso contra la denegación de la libertad bajo fianza. Los abogados de oficio del Sr. Rusesabagina tampoco expusieron esta vez ningún argumento que pudiera cuestionar las actuaciones del Gobierno y, entre otras cosas, no plantearon la cuestión de su secuestro y detención en régimen de incomunicación, ni su propensión a sufrir una enfermedad grave. El 2 de octubre de 2020, el tribunal intermedio de Nyarugenge desestimó el recurso.

29. El Sr. Rusesabagina permanece recluido en la prisión de Mageragere, una cárcel local, en la que no puede comunicarse libremente y de forma confidencial con su abogado. En una entrevista realizada en febrero de 2021, el Ministro de Justicia defendió específicamente el derecho de las autoridades penitenciarias a controlar la correspondencia entre el Sr. Rusesabagina y su abogado, y reconoció que interceptaban y leían esas comunicaciones.

30. La fuente sostiene que, tras haber sido representado por dos abogados de oficio, que no presentaron las peticiones y objeciones básicas, y solo tras grandes esfuerzos de su familia para que el Sr. Rusesabagina pudiera elegir a su propio abogado, la familia pudo contratar a un abogado privado.

31. El 16 de noviembre de 2020 se presentó el escrito de acusación, en el que se imputaban al Sr. Rusesabagina nueve delitos que conllevan una pena de reclusión a perpetuidad. En el escrito de acusación figuraban 17 coacusados, a ninguno de los cuales conocía el Sr. Rusesabagina.

32. Aunque el abogado privado fue designado en octubre de 2020, este representó al Sr. Rusesabagina ante un tribunal por primera vez el 27 de noviembre de 2020, concretamente ante el tribunal intermedio de Nyarugenge mediante videoconferencia. Fue entonces cuando, por primera vez, el abogado del Sr. Rusesabagina planteó la cuestión de su traslado a Rwanda desde los Emiratos Árabes Unidos. El juicio se aplazó hasta el 17 de febrero de 2021. Sin embargo, su abogado no había podido reunirse con el Sr. Rusesabagina con la frecuencia suficiente para preparar su defensa de forma eficaz.

33. Además, la fuente afirma que al Sr. Rusesabagina se le siguió negando el acceso a sus abogados internacionales. El 29 de diciembre de 2020, el Sr. Rusesabagina escribió desde prisión una carta al Colegio de Abogados con el fin de designar a su equipo jurídico internacional, pero la carta fue confiscada posteriormente. Finalmente, tras varios intentos de presentar la solicitud, el 26 de enero de 2021 el Colegio de Abogados denegó su petición de ser representado por un abogado internacional.

34. La fuente argumenta que las restricciones de la prisión privan al Sr. Rusesabagina de una defensa jurídica efectiva. No le es posible recibir llamadas en el lugar donde está recluido. Su única opción para comunicarse con su abogado es hacer llamadas telefónicas al exterior. Sin embargo, en tanto que detenido, solo puede realizar una llamada de cinco minutos, que no es confidencial. Los funcionarios de la prisión han confiscado documentos procesales y otros documentos legales que le había dejado su abogado. Al parecer, el director de la prisión le dijo que los habían confiscado y que no se los devolverían, pese a tratarse de documentos confidenciales.

35. Según la información recibida, las autoridades han negado al Sr. Rusesabagina el acceso a los documentos y materiales necesarios para preparar su defensa. No recibió el escrito de acusación hasta principios de enero de 2021, un mes después de que se fijara la fecha de su juicio y más de cuatro meses después de su detención. Al parecer, los funcionarios de prisiones se han negado a proporcionarle bolígrafos y papel y, evidentemente, un ordenador.

36. Según la fuente, el 2 de diciembre de 2020 el tribunal de primera instancia desestimó su recurso contra una orden de prórroga de la prisión preventiva. El 3 de diciembre de 2020, se fijó la fecha del juicio penal del Sr. Rusesabagina para el 26 de enero de 2021. Además, el tribunal aprobó la fusión del caso del Sr. Rusesabagina y sus 17 coacusados con las diligencias en curso contra un antiguo portavoz de un grupo rebelde. El 26 de enero de 2021 el juicio se aplazó hasta el 17 de febrero de 2021.

37. El 13 de enero de 2021, el abogado privado del Sr. Rusesabagina remitió una carta al magistrado presidente del sistema judicial rwandés, en la que solicitaba reparación por las continuas violaciones del derecho de su defendido a un juicio imparcial. Los días 21 de enero y 12 de febrero se presentaron nuevas peticiones ante el tribunal. El 26 de febrero, el tribunal dictaminó que no era pertinente hablar de cómo se había producido la detención del Sr. Rusesabagina ni de las condiciones de su reclusión; el tribunal no abordó ninguna de las alegaciones de violación del derecho a un juicio imparcial.

38. El 10 de marzo de 2021, el tribunal se pronunció sobre algunas peticiones previas al juicio relativas a violaciones de las garantías procesales. Si bien permitió al Sr. Rusesabagina utilizar un ordenador con el expediente de su caso, el tribunal dictaminó que, en adelante, los documentos confidenciales solo estarían protegidos después de haber sido identificados, sin especificar por quién o si se compartirían copias con funcionarios del Ministerio de Justicia. Además, al parecer el tribunal no proporcionó reparación alguna por el acceso previo del Gobierno a todas las comunicaciones confidenciales, incluidos los documentos que describían su estrategia de defensa. El Sr. Rusesabagina recurrió la decisión y la sesión concluyó sin que se hubiera fijado una fecha para la siguiente audiencia. El procedimiento penal sigue en curso.

39. Desde el 23 de abril de 2021, los abogados rwandeses del Sr. Rusesabagina tienen prohibido llevar documentos, ordenadores o dispositivos electrónicos a sus reuniones con este sin presentarlos antes para su inspección y revisión al director de la prisión. Los documentos marcados como protegidos y confidenciales que le habían enviado sus abogados internacionales fueron confiscados por las autoridades penitenciarias el 29 de abril de 2021. Además, los abogados rwandeses del Sr. Rusesabagina han sido sometidos a registros corporales y de sus pertenencias invasivos e inusuales.

40. La fuente afirma que la salud del Sr. Rusesabagina se ha deteriorado progresiva y gravemente durante su privación de libertad. Es una persona de 66 años que ha sobrevivido a un cáncer y que padece hipertensión y una enfermedad cardiovascular. No se le suministra su medicación para tratar su trastorno cardíaco. Su médico tratante de Bélgica declaró que la interrupción y modificación de su tratamiento, así como el estrés generado, podían provocarle graves crisis hipertensivas e incluso un accidente cerebrovascular. El Sr. Rusesabagina experimenta un agravamiento de los mareos y una hipertensión arterial muy elevada. Además, ha perdido mucho peso. No ha podido revelar el alcance de sus lesiones corporales a sus abogados ni a un médico independiente en el que pueda confiar.

41. El 17 de febrero de 2021, el día en que comenzó el juicio, el Presidente de Rwanda al parecer volvió a afirmar la culpabilidad del Sr. Rusesabagina. No existe ninguna perspectiva de un juicio libre y justo, porque ni el Ministerio de Justicia ni el poder judicial de Rwanda podían o querían hacer nada que menoscabara los pronunciamientos del Presidente.

42. La fuente señala que, a principios de mayo de 2021, tras 260 días, finalmente terminó el régimen de aislamiento del Sr. Rusesabagina. Durante ese tiempo, su único contacto humano consistió en hablar ocasionalmente con los guardias de la prisión, las visitas esporádicas de sus abogados y una llamada telefónica supervisada de cinco minutos a la semana con su familia. La reclusión del Sr. Rusesabagina en régimen de aislamiento al principio de su encarcelamiento y no como último recurso, las terribles circunstancias y el

tiempo de reclusión en régimen de aislamiento, así como la falta de supervisión judicial, constituyen presuntamente una vulneración de sus derechos.

i. Categoría I

43. Según la fuente, el traslado extrajudicial del Sr. Rusesabagina a Rwanda carecía de fundamento jurídico. La fuente se remite a los artículos 9 y 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al artículo 6 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y al artículo 68 del Código de Procedimiento Penal de Rwanda. La detención y el traslado del Sr. Rusesabagina a Rwanda carecían presuntamente de fundamento jurídico y de las debidas garantías procesales, en contravención del artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del artículo 9 del Pacto.

ii. Categoría II

44. La fuente alega que la privación de libertad del Sr. Rusesabagina es arbitraria porque es consecuencia del ejercicio de su derecho fundamental a la libertad de expresión.

45. El derecho a la libertad de expresión está protegido por el artículo 19 del Pacto, que es de especial importancia para los opositores políticos. Las restricciones al derecho a la libertad de expresión política están muy limitadas. El derecho a la libertad de expresión también está protegido por el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, mientras que el artículo 38 de la Constitución de Rwanda reconoce y garantiza el derecho a la libertad de expresión.

46. La protección de la libertad de expresión “es suficientemente amplia para incluir el derecho de toda persona a criticar o evaluar abiertamente y en público a su gobierno sin temor a interferencias o castigos. Sin esa protección, los miembros de la oposición política y los activistas de derechos humanos no podrían criticar, investigar ni denunciar prácticas corruptas e ilegales de funcionarios gubernamentales”³.

47. Se alega que, pese a las garantías legales internacionales y nacionales que amparan el derecho de las personas a la libertad de expresión, el Gobierno detuvo arbitrariamente al Sr. Rusesabagina como consecuencia directa de su condena pública del Gobierno y de su oposición política. Al parecer, el Gobierno sigue una pauta documentada de ataques e intentos de silenciar a sus opositores y críticos mediante el acoso y las detenciones.

48. La fuente recuerda que “el intercambio de información e ideas a través de los medios de comunicación en línea no puede calificarse razonablemente como una amenaza contra la moral, el orden público y el bienestar general en una sociedad democrática”⁴.

49. La fuente declara que las críticas públicas vertidas por el Sr. Rusesabagina contra el Presidente y el Gobierno están amparadas por su derecho a la libertad de expresión. Ya sea en forma de libro, hablando en la radio, compartiendo su opinión en línea o en entrevistas, el Sr. Rusesabagina ha sido un crítico explícito al que el Gobierno ha querido silenciar durante muchos años. Sus críticas públicas constituyen el ejercicio de un derecho fundamental y, por tanto, no pueden utilizarse para justificar una privación de libertad.

iii. Categoría III

50. La fuente afirma que el Gobierno ha vulnerado el derecho del Sr. Rusesabagina a que se le presente una orden de detención, a que designe a un abogado de su elección, a la presunción de inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad, a un trato humano, a una pronta asistencia consular y a ser llevado sin demora ante un tribunal.

51. Las autoridades rwandesas presuntamente vulneraron los derechos del Sr. Rusesabagina al no presentarle una orden de detención ni una orden judicial. El artículo 9, párrafo 1, del Pacto y el principio 2 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión prohíben la detención arbitraria y exigen el cumplimiento de las normas internas que definen los procedimientos

³ Opinión núm. 22/2013, párr. 11.

⁴ Opinión núm. 71/2019, párr. 79.

para la detención, como que se especifique en qué casos se requiere una orden de detención y se autorice el acceso a asistencia letrada. Según la legislación rwandesa, la orden de detención debe presentarse a la persona contra la que se emite, a la que se le entregará una copia.

52. La fuente alega que, en el momento de la detención, no se presentó al Sr. Rusesabagina una orden de detención ni otra orden judicial. Aunque el Gobierno ha afirmado que había una orden de detención internacional, nunca la ha presentado. Se alega que, dado que el Sr. Rusesabagina fue detenido sin una orden judicial, cuando esta se exige por ley, las autoridades vulneraron sus derechos y su consiguiente privación de libertad es arbitraria.

53. La fuente también recuerda que el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, en la que tanto Rwanda como Bélgica son parte, establece la obligación de prestar asistencia consular a los detenidos en un país extranjero.

54. El principio 16, párrafo 2, del Conjunto de Principios reconoce el derecho de un extranjero detenido a “ponerse en comunicación por los medios adecuados con una oficina consular o la misión diplomática del Estado del que sea nacional”. La regla 62 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) dispone también que: “Los reclusos de nacionalidad extranjera gozarán de facilidades adecuadas para comunicarse con los representantes diplomáticos y consulares del Estado del que sean nacionales”. La denegación de los derechos consulares constituye presuntamente una denegación del derecho a un juicio imparcial.

55. El Sr. Rusesabagina es ciudadano belga. Sin embargo, el Gobierno de Rwanda no informó a las autoridades belgas de su detención hasta tres días después de que se produjera. Además, las autoridades responsables de la detención no dieron al Sr. Rusesabagina la oportunidad de comunicarse con el consulado belga.

56. El artículo 14, párrafo 3 b), del Pacto prevé que el acusado tiene derecho a “disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección”. En su observación general núm. 32 (2007), el Comité de Derechos Humanos estableció que los acusados deben tener acceso a los documentos y otras pruebas, incluidos “todos los materiales que la acusación tenga previsto presentar ante el tribunal contra el acusado o que constituyan pruebas de descargo”. También afirmó que los abogados “deben poder reunirse con sus clientes en privado y comunicarse con los acusados en condiciones que garanticen plenamente el carácter confidencial de sus comunicaciones” (párrs. 33 y 34).

57. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha interpretado este derecho como un derecho inderogable y ha dictaminado que la restricción del acceso de un demandante al abogado que ha contratado constituye una violación del derecho a la representación legal de su elección⁵.

58. La fuente afirma que el Gobierno utilizó su propio sistema de asistencia letrada, concebido para los acusados carentes de recursos, para imponer un abogado al Sr. Rusesabagina, cuando sabía que su familia había contratado a un abogado para representarlo. Al parecer, esto solo podría haberse hecho con la intención de denegar al Sr. Rusesabagina un abogado independiente. Los abogados de oficio nunca plantearon la cuestión de su traslado a Rwanda desde los Emiratos Árabes Unidos como un límite a la jurisdicción del tribunal, o como una razón por la que el tribunal debería declinar el ejercicio de su jurisdicción sobre la base del abuso de procedimiento que llevó al Sr. Rusesabagina ante él.

59. El abogado designado por la familia del Sr. Rusesabagina llevó una carta a la Oficina de Investigación de Rwanda en la que se confirmaba su representación poco después de la detención. Después de que la Oficina recibiera la carta y de que el abogado acudiera a la comisaría en dos ocasiones, el Gobierno nombró a un abogado de oficio. Más de un mes

⁵ Véanse, por ejemplo, *Croissant v. Germany* (demanda núm. 13611/88), sentencia de 25 de septiembre de 1992, párr. 29, y *Martin v. Estonia* (demanda núm. 35985/09), sentencia de 30 de mayo de 2013, párr. 90.

después de la detención, se permitió finalmente al abogado privado visitar al Sr. Rusesabagina, aunque solo pudo representarlo por primera vez ante un tribunal a finales de noviembre de 2020.

60. La fuente afirma que se sigue negando al Sr. Rusesabagina el acceso a los abogados internacionales. Aunque se le ha permitido finalmente tener un abogado de su elección, el Sr. Rusesabagina sigue sin poder mantener conversaciones telefónicas privadas con su abogado y este tampoco puede compartir con él los expedientes del caso. Además, debido a la COVID-19, su abogado no pudo reunirse con él durante varias semanas, a pesar del inicio del juicio. En consecuencia, se privó al Sr. Rusesabagina de la posibilidad de preparar el juicio con su abogado.

61. La fuente afirma que el Sr. Rusesabagina no pudo recibir asistencia letrada de un abogado de su elección durante más de un mes después de su detención; que se le ha denegado constantemente la asistencia letrada internacional legítima, a pesar del carácter internacional de su detención y de los cargos que se le imputan; y que las restricciones prácticas que le privan de la posibilidad de preparar una defensa eficaz constituyen una vulneración del artículo 14 del Pacto.

62. La fuente recuerda que, en virtud del artículo 14, párrafo 2, del Pacto, del artículo 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del principio 36 del Conjunto de Principios, toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. En virtud de la presunción de inocencia, la carga de la prueba para establecer la culpabilidad del acusado recae sobre la acusación. Las autoridades públicas deben abstenerse de prejuzgar el resultado del proceso haciendo cualquier declaración oficial o utilizando un lenguaje concluyente que muestre a un acusado como culpable.

63. El 6 de septiembre de 2020, durante una emisión en la televisión nacional, el Presidente dijo al parecer que “Rusesabagina encabeza un grupo de terroristas que ha matado a rwandeses. Tendrá que pagar por estos delitos. Rusesabagina tiene las manos manchadas de la sangre de los rwandeses”. Presuntamente, también afirmó que el Sr. Rusesabagina se convirtió en “un asociado de estos grupos o incluso en un líder de diferentes grupos” y que “estos grupos [...] que Rusesabagina dirigía, o de los cuales es uno de sus líderes, mataron a personas en la región suroeste de nuestro país en unos tres distritos”. Según la información recibida, el Sr. Rusesabagina fue imputado por un tribunal rwandés el 14 de septiembre de 2020, una semana después de la emisión en la que intervino el Presidente. Posteriormente, el 17 de febrero de 2021, el primer día del juicio del Sr. Rusesabagina, el Presidente hizo al parecer comentarios similares. La fuente alega que estos hechos fueron una violación de la presunción de inocencia y constituyen *de facto* un veredicto de culpabilidad.

64. La fuente recuerda además que el artículo 10, párrafo 1, del Pacto y el principio 1 del Conjunto de Principios establecen que toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. El artículo 7 del Pacto, el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 14 de la Constitución de Rwanda y el principio 6 del Conjunto de Principios prevén la prohibición de la tortura y los tratos crueles e inhumanos. La fuente afirma que, en el presente caso, las violaciones constituyen también una contravención de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

65. Se alega que las autoridades del Gobierno de Rwanda vulneraron el derecho del Sr. Rusesabagina a no ser torturado ni sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, al someterlo a una desaparición forzada y negarle constantemente una atención médica adecuada, incluida la medicación para la tensión arterial, a pesar de que el Sr. Rusesabagina padecía graves problemas de salud preexistentes.

66. Se entiende por desaparición forzada cualquier forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. Las desapariciones forzadas vulneran muchas disposiciones sustantivas y de procedimiento del Pacto, incluidos los artículos 9 y 14, y constituyen una forma particularmente grave de reclusión arbitraria.

67. La fuente alega que las autoridades vulneraron el derecho del Sr. Rusesabagina a un trato humano cuando lo secuestraron y posteriormente lo encarcelaron, lo mantuvieron en régimen de aislamiento durante tres días en circunstancias que implicaban tortura, interrogatorios y maltrato físico y psicológico, y lo sometieron a una desaparición forzada. Además, los 260 días posteriores que permaneció recluso en régimen de aislamiento constituyen presuntamente una forma de tortura, debido al grave sufrimiento psicológico y al desgaste físico que le provocaron.

68. Según el Conjunto de Principios, se proporcionará atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario, de forma gratuita. En el presente caso, el estado de salud del Sr. Rusesabagina es al parecer extremadamente delicado y toma medicamentos bajo prescripción médica desde 1996.

69. La fuente afirma que el Gobierno no está proporcionando tratamiento médico adecuado para el estado de salud del Sr. Rusesabagina, ya que las autoridades no están entregando la medicación bajo prescripción médica que se ha facilitado a los guardias de la prisión. El Sr. Rusesabagina ha sufrido una rápida pérdida de peso desde su detención. Sufre hipertensión arterial, dolores de cabeza agudos y mareos de forma constante. Su salud se ha deteriorado hasta tal punto que corre el riesgo de morir de un accidente cerebrovascular. La fuente sostiene que la denegación por parte del Gobierno de un tratamiento médico adecuado constituye una violación de los artículos 7 y 10 del Pacto y del artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

70. Las garantías procesales incluyen el derecho de una persona detenida o reclusa a ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado para ejercer funciones judiciales. El Comité de Derechos Humanos interpreta que la expresión “sin demora” equivale a un plazo máximo de unas 48 horas, salvo en circunstancias excepcionales. La Ley de Lucha contra el Terrorismo de Rwanda de 2018, que al parecer establece la duración de la detención y la prisión provisional de un sospechoso de un acto terrorista en 15 días renovables, presuntamente incumple las obligaciones que incumben al país en virtud del Pacto.

71. La fuente afirma que el Gobierno mantuvo recluso al Sr. Rusesabagina durante 18 días antes de permitirle ver a un juez. Dieciocho días de reclusión sin comparecer ante un tribunal son 16 días más de los que permite el derecho internacional de los derechos humanos. La fuente sostiene que el trato dispensado al Sr. Rusesabagina y el hecho de que el Gobierno no haya garantizado los derechos que le amparaban en virtud de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto equivalen a una privación arbitraria de la libertad con arreglo a la categoría III.

iv. Categoría V

72. La fuente alega que el Gobierno persigue al Sr. Rusesabagina por haber expresado sus opiniones políticas y, en particular, por su asociación con un grupo políticamente opuesto al Presidente, así como por sus críticas contra el Gobierno, su labor en el ámbito de las organizaciones intergubernamentales y de la sociedad civil, y su apoyo a la lucha contra el genocidio.

73. El Sr. Rusesabagina ha criticado la existencia de una amplia gama de violaciones de los derechos humanos en Rwanda, entre otras la falta de democracia y la celebración de elecciones en condiciones de parcialidad. También ha denunciado casos de detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Ha denunciado públicamente crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Sus críticas son secundadas, entre otros, por organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos.

74. El Gobierno ha amenazado presuntamente al Sr. Rusesabagina desde 2005. El Presidente se ha referido a él como un héroe fabricado. Durante un acto de conmemoración del genocidio en 2007, el Presidente tachó al Sr. Rusesabagina de estafador, gánster y alguien que difama el nombre de Rwanda. En 2010, en el período previo a las elecciones presidenciales, al parecer aumentó el acoso por parte del Gobierno, ya que el Sr. Rusesabagina se mostró más activo en sus críticas. El Sr. Rusesabagina ha desempeñado un papel activo en la organización de los rwandeses en la diáspora. La realización de estas

actividades durante 15 años ha conducido presuntamente a su secuestro y detención actuales. Por consiguiente, la fuente sostiene que su detención es arbitraria con arreglo a la categoría V.

Respuesta del Gobierno

75. El 3 de junio de 2021, el Grupo de Trabajo transmitió las alegaciones de la fuente al Gobierno en el marco de su procedimiento ordinario de comunicaciones. Asimismo, le pidió que presentara, a más tardar el 3 de agosto de 2021, información detallada sobre la situación del Sr. Rusesabagina y que aclarara las disposiciones legales en virtud de las cuales seguía privado de libertad, así como la compatibilidad de esas disposiciones con las obligaciones contraídas por Rwanda en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y, en particular, de los tratados ratificados por el Estado. El Grupo de Trabajo exhortó al Gobierno a que velara por la integridad física y psicológica del Sr. Rusesabagina.

76. El Grupo de Trabajo lamenta no haber recibido respuesta del Gobierno.

Deliberaciones

77. Ante la falta de respuesta del Gobierno, el Grupo de Trabajo ha decidido emitir la presente opinión, de conformidad con el párrafo 15 de sus métodos de trabajo.

78. Para determinar si la privación de libertad de una persona es arbitraria, el Grupo de Trabajo tiene en cuenta los principios establecidos en su jurisprudencia sobre la manera de proceder en relación con las cuestiones probatorias. Si la fuente ha presentado indicios razonables de una vulneración del derecho internacional constitutiva de detención arbitraria, debe entenderse que la carga de la prueba recae en el Gobierno en caso de que desee refutar las alegaciones⁶. En el presente caso, el Gobierno ha optado por no impugnar las alegaciones, en principio fiables, formuladas por la fuente.

79. El Grupo de Trabajo desea reafirmar que los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y hacer efectivos todos los derechos humanos y libertades fundamentales, incluido el derecho a la libertad personal, y que toda legislación nacional que permita la privación de libertad debe elaborarse y aplicarse de conformidad con las normas internacionales pertinentes establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto y otros instrumentos internacionales y regionales aplicables. Por consiguiente, aunque la privación de libertad se ajuste a la legislación, los reglamentos y las prácticas nacionales, el mandato del Grupo de Trabajo consiste en evaluar las circunstancias de la privación de libertad, incluida la propia legislación, con el fin de determinar si dicha privación de libertad se ajusta también a las disposiciones pertinentes del derecho internacional de los derechos humanos⁷.

Categoría I

80. Al argumentar que el traslado del Sr. Rusesabagina a Rwanda y su detención en dicho país carecían de fundamento jurídico, la fuente se remitió a los artículos 9 y 13 del Pacto, al artículo 6 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y al artículo 68 del Código de Procedimiento Penal de Rwanda.

81. Los hechos presentados por la fuente muestran de manera clara que el traslado del Sr. Rusesabagina desde Dubái a Kigali en un avión privado fue organizado por el Gobierno de Rwanda, como admitió el Ministro de Justicia, y que se realizó sin su conocimiento ni consentimiento. Fue sedado mientras estaba en el avión. El Grupo de Trabajo considera que todo el proceso de embarcar al Sr. Rusesabagina en el avión y trasladarlo a un destino al que no tenía intención de ir es constitutivo de secuestro, lo que también implica una privación de libertad.

82. En el presente caso, el Sr. Rusesabagina no fue informado de los motivos de su detención cuando fue trasladado al avión privado, lo que constituye una violación de la prohibición de la detención arbitraria. Cuando se dio cuenta después de que el avión estaba aterrizando en Kigali, trató de salir del avión, pensando que le iban a matar o a hacer daño.

⁶ A/HRC/19/57, párr. 68.

⁷ Véanse, por ejemplo, las opiniones núms. 36/2019, párr. 33; 42/2019, párr. 43; 51/2019, párr. 53; y 56/2019, párr. 74.

A continuación, fue inmovilizado por cuatro agentes rwandeses, que entraron en el avión y lo ataron. Lo arrastraron por la pista del aeropuerto y lo metieron en un coche. En ningún momento se le ha proporcionado la documentación relativa a la detención, como exige la legislación rwandesa.

83. El derecho internacional relativo al derecho a la libertad personal permite restringir este derecho en las circunstancias apropiadas. Sin embargo, incluye la garantía de que se presente una orden de detención en los casos en que no se trate de detenciones realizadas en flagrante delito, para garantizar la objetividad e imparcialidad del proceso de detención. Además, la decisión sobre la fundamentación de la detención debe tomarla una autoridad judicial externa, competente, independiente e imparcial. Esto es inherente, desde un punto de vista procesal, al derecho a la libertad y la seguridad personales y a la prohibición de la privación arbitraria de la libertad, en virtud de los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos⁸.

84. En consecuencia, el Grupo de Trabajo considera que Rwanda vulneró los derechos que amparaban al Sr. Rusesabagina en virtud del artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 9 del Pacto y los principios 2, 10 y 36, párrafo 2, del Conjunto de Principios.

85. La fuente afirma que el Sr. Rusesabagina estuvo detenido en régimen de incomunicación entre el 27 y el 31 de agosto de 2020 y que fue torturado durante ese período. No se sabe dónde estuvo detenido el Sr. Rusesabagina durante ese tiempo, ni en qué condiciones.

86. La reclusión en lugares secretos, no revelados y en circunstancias desconocidas para los familiares de la persona detenida vulnera el derecho de esta a ser llevada sin demora ante una autoridad judicial y a impugnar ante una corte o un tribunal la legalidad de su privación de libertad, amparado por el artículo 9, párrafos 3 y 4, del Pacto. La supervisión judicial de la privación de libertad es una salvaguardia básica de la libertad personal y resulta fundamental para que la reclusión tenga fundamento legítimo. En las circunstancias que concurren en el encarcelamiento del Sr. Rusesabagina, su desaparición impidió que fuera llevado ante un juez y pudiera impugnar su privación de libertad ante un tribunal durante los primeros 18 días tras su detención. Por consiguiente, también se vulneró su derecho a un recurso efectivo, reconocido en el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 2, párrafo 3, del Pacto. Además, el Sr. Rusesabagina fue sustraído del amparo de la ley, lo que constituyó una vulneración de su derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, consagrado en el artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 16 del Pacto.

87. Mantener a un detenido en un lugar desconocido para sus familiares y abogados es una privación de libertad análoga a una desaparición forzada, que entraña la negativa a revelar la suerte o el paradero de las personas afectadas o a reconocer su detención. Esto carece de fundamento jurídico válido en cualquier circunstancia. Las desapariciones forzadas vulneran muchas disposiciones sustantivas y de procedimiento del Pacto, y constituyen una forma particularmente grave de reclusión arbitraria⁹. También son intrínsecamente arbitrarias, ya que sustraen a la persona de la protección de la ley.

88. Por esas razones, el Grupo de Trabajo considera que la privación de libertad del Sr. Rusesabagina carece de fundamento jurídico y, por lo tanto, es arbitraria conforme a la categoría I.

Categoría II

89. La libertad de opinión y de expresión y la libertad de reunión pacífica son derechos humanos fundamentales consagrados en los artículos 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y los artículos 19 y 21 del Pacto¹⁰. El Gobierno debe respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a tener y expresar opiniones, incluidas las que no coincidan con

⁸ Opinión núm. 32/2020, párr. 33.

⁹ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35 (2014), párr. 17.

¹⁰ *Yong-Joo Kang c. la República de Corea* (CCPR/C/78/D/878/1999), párr. 7.2.

su política oficial, así como el derecho a pensar y manifestar convicciones personales contrarias a su ideología oficial¹¹.

90. Las restricciones del derecho a la libertad de expresión no deben ser excesivamente amplias; deben ajustarse al principio de proporcionalidad, deben ser adecuadas para desempeñar su función protectora, deben ser el instrumento menos perturbador de los que permitan conseguir el resultado deseado, y deben guardar proporción con el interés que debe protegerse. Conviene señalar que el Pacto atribuye una gran importancia a la expresión sin inhibiciones en el debate público sobre figuras del ámbito público y político en una sociedad democrática¹².

91. La fuente alega que la privación de libertad del Sr. Rusesabagina es arbitraria porque es consecuencia del ejercicio de su derecho fundamental a la libertad de expresión. Desde 1994, el Sr. Rusesabagina ha prestado apoyo a los supervivientes y las víctimas del genocidio y la opresión. Ha dedicado su vida a impartir charlas sobre las enseñanzas extraídas del genocidio de Rwanda, dirigidas a periodistas, educadores, estudiantes, encargados de la formulación de políticas, líderes empresariales y defensores de los derechos humanos. A través de su Fundación Hotel Rwanda Rusesabagina, su objetivo es recabar apoyo en favor de una comisión de la verdad y la reconciliación para Rwanda y la región de los Grandes Lagos administrada internacionalmente. Ha criticado al Gobierno y ha abordado abiertamente la responsabilidad de este por la comisión de presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y, posiblemente, genocidio. Como resultado de ello, se ha convertido en blanco de las críticas públicas del Gobierno por sus opiniones y creencias. Tras un intento fallido de asesinato en 1996, abandonó Rwanda para solicitar asilo en Bélgica, donde siguió expresando sus críticas contra las políticas del Gobierno. En 2009, temiendo por su seguridad, se vio obligado a trasladarse a los Estados Unidos.

92. El Sr. Rusesabagina se convirtió en un opositor político en la diáspora, ejerciendo durante un tiempo como el primer jefe de una coalición de partidos políticos cuando fue fundada en 2018 y criticando frecuentemente al Gobierno por su represión de la disidencia y la libertad políticas.

93. En este contexto, el Comité de Derechos Humanos ha instado a Rwanda a que se abstenga de enjuiciar a “políticos, periodistas y defensores de los derechos humanos como medio para disuadirlos de expresar libremente su opinión, y adoptar medidas urgentes para investigar los atentados que han sufrido esas personas”¹³. El Comité contra la Tortura también ha formulado recomendaciones análogas¹⁴.

94. El Grupo de Trabajo coincide con la fuente en que las críticas públicas vertidas por el Sr. Rusesabagina contra el Presidente y el Gobierno están amparadas por su derecho a la libertad de expresión. Ya sea en forma de libro, hablando en la radio, compartiendo su opinión en línea o en entrevistas, el Sr. Rusesabagina ha sido un crítico explícito al que el Gobierno ha querido silenciar durante muchos años. Las críticas públicas del Sr. Rusesabagina constituyen el ejercicio de un derecho fundamental y, por tanto, no pueden utilizarse para justificar una privación de libertad.

95. La privación de libertad del Sr. Rusesabagina es consecuencia de su ejercicio de derechos humanos universalmente reconocidos, en particular el derecho a las libertades de opinión, de expresión y de reunión pacífica. La privación de libertad del Sr. Rusesabagina puede interpretarse como un acto premeditado para reprimir su disidencia, intimidándolo a él y a otras personas asociadas con su trabajo.

96. El Grupo de Trabajo concluye que la privación de libertad del Sr. Rusesabagina es el resultado del ejercicio pacífico por este de su derecho a la libertad de opinión y de expresión y su derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, y que esa privación de libertad contraviene los artículos 19 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 19 y 25 del Pacto. Su detención es arbitraria conforme a la categoría II.

¹¹ Opiniones núms. 76/2017, párr. 62; 88/2017, párr. 32; y 94/2017, párr. 59.

¹² Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 34, párr. 34.

¹³ CCPR/C/RWA/CO/4, párr. 40.

¹⁴ CAT/C/RWA/CO/2, párrs. 52 y 53.

Categoría III

97. Habida cuenta de su conclusión de que la privación de libertad del Sr. Rusesabagina es arbitraria conforme a la categoría II, el Grupo de Trabajo desea subrayar que, en tales circunstancias, no debería celebrarse ningún juicio. Sin embargo, dado que se mantiene recluido al Sr. Rusesabagina y teniendo en cuenta las alegaciones de la fuente, el Grupo de Trabajo examinará a continuación las presuntas violaciones del derecho a un juicio imparcial y a las garantías procesales.

98. El Grupo de Trabajo observa que las presuntas violaciones de las normas y estándares internacionales de derechos humanos en la detención y reclusión del Sr. Rusesabagina incluyen las normas mínimas del debido proceso en relación con un juicio imparcial y el tratamiento de las personas privadas de libertad. La fuente recuerda que el Sr. Rusesabagina fue detenido sin una orden judicial y sin ser informado de los motivos de su detención. Esto contraviene los artículos 9, párrafo 2, y 14, párrafo 3 a), del Pacto, así como los principios 10 y 13 del Conjunto de Principios.

99. La fuente afirma que se vulneró el derecho del Sr. Rusesabagina a un juicio imparcial, ya que no fue llevado sin demora ante un tribunal, se le negó el derecho a un abogado de su elección, no se le proporcionó una pronta asistencia consular, no se le concedió la presunción de inocencia y fue sometido a un trato inhumano.

100. La fuente alega que, en el momento de la detención, no se presentó al Sr. Rusesabagina una orden de detención ni otra orden judicial. Aunque el Gobierno afirmó que se había emitido contra él una orden de detención internacional, nunca la ha presentado. Se alega que, dado que el Sr. Rusesabagina fue detenido sin una orden judicial, cuando esta se exigía por ley, las autoridades vulneraron sus derechos y su consiguiente privación de libertad es arbitraria.

101. Al no haber mediado una orden de detención ni una orden judicial, la detención vulneró el derecho que amparaba al Sr. Rusesabagina en virtud del artículo 9, párrafo 1, del Pacto y del principio 2 del Conjunto de Principios, que prohíben la detención arbitraria y exigen el cumplimiento de las normas internas que definen tales procedimientos, entre otras cosas que se especifique en qué casos se requiere una orden de detención y autorizando el acceso a asistencia letrada. Según la legislación rwandesa, la orden de detención “debe presentarse a las personas contra las que se emite, y dichas personas recibirán una copia de la orden”.

102. En cuanto al derecho a la representación legal, la fuente afirma que el Gobierno impuso un abogado de oficio al Sr. Rusesabagina, cuando se sabía que se había designado a un abogado privado para representarlo. Al parecer, esto solo pudo haberse hecho con la intención de denegar al Sr. Rusesabagina un abogado independiente.

103. La familia solicitó un abogado específico para el Sr. Rusesabagina, e hizo entrega a ese abogado de una carta en la que se confirmaba su representación. Funcionarios gubernamentales recibieron dicha carta y, después de que el abogado acudiera a la comisaría en dos ocasiones, se asignó un abogado de oficio al Sr. Rusesabagina. En octubre, más de un mes después de la detención, se permitió finalmente al abogado privado visitar al Sr. Rusesabagina, aunque no pudo representarlo ante un tribunal hasta finales de noviembre de 2020.

104. La representación legal es una garantía fundamental del derecho a un juicio imparcial. Se debería disponer de asistencia letrada en todas las etapas del procedimiento penal, a saber, durante las fases de instrucción, juicio y apelación. La denegación del acceso a un abogado socava y compromete sustancialmente la capacidad de defenderse de las acusaciones en cualquier procedimiento judicial, lo que puede dar lugar a nuevas violaciones de las garantías procesales.

105. El principio 18, párrafo 3, del Conjunto de Principios y la regla 61, párrafo 1, de las Reglas Nelson Mandela establecen la obligación de facilitar, sin demora, asistencia letrada a los acusados. Las personas privadas de libertad tienen derecho a la asistencia jurídica de un abogado de su elección, en cualquier momento de su privación de libertad, en

particular inmediatamente después de ser detenidas, y en el momento de la detención deben ser informadas sin demora de este derecho¹⁵.

106. El artículo 14, párrafo 3 b), del Pacto dispone que el acusado tiene derecho a “disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección”. Los acusados deben tener acceso a los documentos y otras pruebas, con inclusión de todos los materiales que la acusación tenga previsto presentar ante el tribunal contra el acusado o que puedan asistir a la defensa. Además, se estipula que los acusados deben “poder reunirse con sus clientes en privado y comunicarse con los acusados en condiciones que garanticen plenamente el carácter confidencial de sus comunicaciones”¹⁶.

107. El Grupo de Trabajo también observa las alegaciones de la fuente de que se denegó al Sr. Rusesabagina el acceso a la asistencia consular. Con arreglo al artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, en la que tanto Rwanda como Bélgica son parte, se debe prestar asistencia consular a los detenidos en un país extranjero. Adicionalmente, el principio 16, párrafo 2, del Conjunto de Principios reconoce el derecho de un extranjero detenido a “ponerse en comunicación por los medios adecuados con una oficina consular o la misión diplomática del Estado del que sea nacional” y la regla 62 de las Reglas Nelson Mandela establece que: “Los reclusos de nacionalidad extranjera gozarán de facilidades adecuadas para comunicarse con los representantes diplomáticos y consulares del Estado del que sean nacionales”. Se alega que la denegación de los derechos consulares constituye una denegación del derecho a un juicio imparcial.

108. El Sr. Rusesabagina es ciudadano belga desde 1999. Sin embargo, parece que Rwanda no informó a las autoridades belgas de su reclusión hasta varios días después de su detención, ni tampoco informó puntualmente al Sr. Rusesabagina de su derecho a comunicarse con un funcionario consular belga, ni facilitó dicha comunicación.

109. En cuanto a la presunción de inocencia, la fuente recuerda que el 6 de septiembre de 2020, en una emisión de la televisión nacional, el Presidente acusó supuestamente al Sr. Rusesabagina de dirigir una organización terrorista que había matado a rwandeses y de que tenía las manos manchadas de sangre de sus compatriotas. Al parecer también dijo que el Sr. Rusesabagina había matado a personas en el suroeste del país. El 14 de septiembre de 2020, una semana después de la emisión en la que intervino el Presidente, el Sr. Rusesabagina fue según se informa imputado por un tribunal rwandés. Posteriormente, el 17 de febrero de 2021, el primer día del juicio del Sr. Rusesabagina, el Presidente hizo al parecer comentarios similares.

110. En virtud del artículo 14, párrafo 2, del Pacto y del artículo 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del principio 36 del Conjunto de Principios, toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. Ello requiere que, para establecer la culpabilidad del acusado, la carga de la prueba recaiga en el fiscal y las autoridades públicas deben abstenerse de prejuzgar el resultado del proceso, de hacer declaraciones oficiales o de utilizar un lenguaje concluyente que muestre a un acusado como culpable.

111. Según la fuente, del 28 al 31 de agosto de 2020, el Sr. Rusesabagina estuvo detenido en unas instalaciones descritas como un “matadero”. Durante la mañana del 28 de agosto, el Sr. Rusesabagina fue presuntamente torturado por un agente gubernamental, que llevaba botas militares y le pisó el cuello mientras afirmaba que “sabemos cómo torturar”. Durante su reclusión en el “matadero”, el Sr. Rusesabagina fue inmovilizado, le vendaron los ojos y lo mantuvieron en régimen de aislamiento. No se le proporcionaron alimentos y, en ocasiones, se le impidió dormir. A sus 66 años, superviviente de cáncer y con problemas de salud crónicos, lo mantenían atado, sin que pudiera levantarse ni caminar, le faltaban las fuerzas y se ahogaba.

¹⁵ Véanse también los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal.

¹⁶ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 32 (2007), párrs. 33 y 34.

112. Según la información recibida, también mientras estuvo detenido en el “matadero”, al Sr. Rusesabagina le quitaron la venda de los ojos en una ocasión, para ser sometido a un interrogatorio por el Fiscal General de Rwanda y el Secretario General de la Oficina de Investigación de Rwanda. Presuntamente, esas personas dijeron al Sr. Rusesabagina que necesitaban una confesión que incriminara falsamente a un dirigente extranjero en los delitos de los que iba a ser acusado, entre ellos el de recibir dinero para una organización terrorista. Al parecer, le ofrecieron ponerle en libertad si aceptaba la acusación, a lo que el Sr. Rusesabagina se negó. Posteriormente fue trasladado a la comisaría de Remera, donde estuvo detenido hasta el 17 de septiembre, y después fue trasladado a la prisión central de Nyarugenge, en Mageragere.

113. El derecho internacional de los derechos humanos exige que los detenidos estén protegidos de toda práctica que vulnere su derecho a no ser sometido a cualquier acto que pueda causar dolor o sufrimiento severo, tanto físico como mental, infligido intencionalmente a una persona. El derecho a no ser sometido a torturas ni a otros malos tratos o penas tiene carácter absoluto; se aplica en todas las circunstancias y nunca puede ser objeto de restricciones, ni siquiera en tiempos de guerra o de estado de emergencia. No podrá invocarse ninguna circunstancia excepcional, incluidas las amenazas de terrorismo o de otros delitos violentos, para justificar la tortura u otros malos tratos. Esa prohibición se aplica independientemente del delito presuntamente cometido por el acusado.

114. El artículo 10, párrafo 1, del Pacto y el principio 1 del Conjunto de Principios establecen que toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. El artículo 7 del Pacto, el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 14 de la Constitución de Rwanda y el principio 6 del Conjunto de Principios prevén la prohibición de la tortura y los tratos crueles e inhumanos. El artículo 14, párrafo 3 g), del Pacto prohíbe además la utilización de métodos de coacción o coerción, incluidos la tortura y los malos tratos, con el fin de obtener y utilizar confesiones incriminatorias. La fuente afirma que, en el presente caso, las vulneraciones constituyen también una contravención de la Convención contra la Tortura. El Grupo de Trabajo remite por consiguiente el presente caso al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes para que tome las medidas correspondientes.

115. La fuente alega que las autoridades vulneraron el derecho del Sr. Rusesabagina a un trato humano cuando lo secuestraron y posteriormente lo encarcelaron, lo mantuvieron en régimen de aislamiento durante tres días en circunstancias que implicaron tortura, interrogatorios y maltrato físico y psicológico, y lo sometieron a una desaparición forzada. Además, los 260 días posteriores que permaneció recluido en régimen de aislamiento constituyen presuntamente una forma de tortura, debido al grave sufrimiento psicológico y al desgaste físico que le provocaron.

116. Se alega que las autoridades gubernamentales vulneraron el derecho del Sr. Rusesabagina a no ser torturado ni sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, al negarle constantemente una atención médica adecuada, incluida la medicación para la tensión arterial, a pesar de que el Sr. Rusesabagina padecía graves problemas de salud preexistentes.

117. Según el Conjunto de Principios, se proporcionará atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario, de forma gratuita. En el presente caso, el estado de salud del Sr. Rusesabagina es al parecer extremadamente delicado y toma medicamentos bajo prescripción médica desde 1996.

118. La fuente afirma que el Gobierno no está proporcionando tratamiento médico adecuado para el estado de salud del Sr. Rusesabagina, ya que las autoridades no están entregando la medicación bajo prescripción médica que, al parecer, la Embajada de Bélgica facilitó a las autoridades penitenciarias. El Sr. Rusesabagina ha sufrido una rápida pérdida de peso desde su detención. Sufre de forma constante hipertensión arterial, dolores de cabeza agudos y mareos. Su salud se ha deteriorado hasta tal punto que corre el riesgo de morir de un accidente cerebrovascular. La fuente sostiene que la denegación por parte del Gobierno de un tratamiento médico adecuado constituye una violación de los artículos 7 y 10 del Pacto y del artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Gobierno no ha

refutado ninguna de esas alegaciones. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo concluye que la privación de libertad era arbitraria conforme a la categoría III.

Categoría V

119. La fuente alega que el Gobierno persigue al Sr. Rusesabagina por haber expresado sus opiniones políticas y, en particular, por su asociación con un grupo políticamente opuesto al Presidente, sus críticas ampliamente difundidas contra el Gobierno, su labor en el ámbito de las organizaciones intergubernamentales y de la sociedad civil, y su apoyo a la lucha contra el genocidio. El Sr. Rusesabagina ha respaldado las peticiones de un cambio de régimen y muchos grupos de la oposición lo consideran un líder.

120. Los hechos ponen de manifiesto que el Sr. Rusesabagina ha sido perseguido por el Gobierno debido a su labor como defensor de los derechos humanos, por las críticas que ha vertido contra el Gobierno con respecto a una amplia gama de cuestiones de derechos humanos, entre otras la celebración de elecciones en condiciones de parcialidad y la falta de democracia, libertad de expresión, libertad de asociación y libertad de prensa. También ha denunciado casos de detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Ha denunciado públicamente crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad desde antes del genocidio de 1994 y especialmente desde 1998. Las críticas del Sr. Rusesabagina son secundadas habitualmente, entre otros, por organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos. Habida cuenta de que el Sr. Rusesabagina ha sido objeto de ataques debido a su activismo como defensor de los derechos humanos y su oposición política al Gobierno, su privación de libertad es discriminatoria, en contravención de los artículos 2, párrafo 1, y 26 del Pacto y 2 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y se considera arbitraria conforme a la categoría V.

Observaciones finales

121. El Grupo de Trabajo ha sido informado de que, el 20 de septiembre de 2021, un tribunal de Kigali declaró al Sr. Rusesabagina culpable de ocho de los nueve cargos que pesaban contra él y lo condenó a 25 años de prisión. Al parecer, la violación de sus garantías procesales, necesarias para la defensa, prosiguió durante el juicio, las audiencias y la imposición de la pena. Por ejemplo, se informa de que la condena se basó en una confesión obtenida bajo coacción. El Sr. Rusesabagina tiene ahora 67 años y una salud delicada, por lo que esta sentencia equivale supuestamente a una condena a muerte.

122. La fuente subraya que la preocupación más urgente sigue siendo la salud del Sr. Rusesabagina, que requiere su puesta en libertad inmediata por razones humanitarias. Sufre a diario síntomas derivados de la privación de la medicación que le fue recetada para tratar su afección cardíaca y, aunque se está recuperando del cáncer, no se ha sometido a una prueba de detección del cáncer desde que comenzó su encarcelamiento. Recientemente ha sufrido una inflamación del brazo, que puede ser consecuencia de una trombosis. El 7 de octubre de 2021, el Parlamento Europeo adoptó una resolución en la que pedía la puesta en libertad inmediata del Sr. Rusesabagina.

123. El Grupo de Trabajo desea subrayar que toda persona detenida tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Ese derecho no solo abarca la atención de salud oportuna y apropiada sino también los factores determinantes básicos de la salud, como el acceso a alimentos, agua y saneamiento suficientes. Además, los reclusos enfermos cuyo estado requiera cuidados especiales, deben ser trasladados a establecimientos especializados o a hospitales civiles. La falta de acceso a una atención médica adecuada vulnera el derecho a la salud y puede dar lugar a otras violaciones de los derechos humanos, como el derecho a la vida.

124. Por último, el Grupo de Trabajo desea dejar claro que las conclusiones de la presente opinión se entienden sin perjuicio de las alegaciones de que el Sr. Rusesabagina fue privado de su libertad en el contexto de un vuelo que hizo escala en los Emiratos Árabes Unidos.

Decisión

125. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Paul Rusesabagina es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 5, 6, 8, 9 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2, 7, 9, 10, 14, 16, 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías I, II, III y V.

126. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de Rwanda que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Rusesabagina sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto.

127. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner al Sr. Rusesabagina inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional. En el contexto actual de la pandemia de COVID-19 y de la amenaza que supone en los lugares de detención, el Grupo de Trabajo exhorta al Gobierno a que adopte medidas urgentes para asegurar la puesta en libertad inmediata e incondicional del Sr. Rusesabagina.

128. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del Sr. Rusesabagina y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

129. De conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes para que tome las medidas correspondientes.

130. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que difunda la presente opinión por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible.

Procedimiento de seguimiento

131. De conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que le proporcionen información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión, en particular:

- a) Si se ha puesto en libertad al Sr. Rusesabagina y, de ser así, en qué fecha;
- b) Si se han concedido indemnizaciones u otras reparaciones al Sr. Rusesabagina;
- c) Si se ha investigado la violación de los derechos del Sr. Rusesabagina y, de ser así, el resultado de la investigación;
- d) Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de Rwanda con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión;
- e) Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.

132. Se invita al Gobierno a que informe al Grupo de Trabajo de las dificultades que pueda haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a que le indique si necesita asistencia técnica adicional, por ejemplo, mediante una visita del Grupo de Trabajo.

133. El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al Grupo de Trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados para aplicar sus recomendaciones, así como de todo caso en que no se haya hecho nada al respecto.

134. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado¹⁷.

[Aprobada el 19 de noviembre de 2021]

¹⁷ Véase la resolución 42/22 del Consejo de Derechos Humanos, párrs. 3 y 7.